

Seminario Internacional
**LÍMITES Y DESAFÍOS DE LA AGENDA
DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA**



Woodrow Wilson
International
Center
for Scholars

La Paz - 2008

*Seminario Internacional Límites y Desafíos
de la Agenda de Seguridad Hemisférica*

© Observatorio de Democracia y Seguridad
Calle Pedro Salazar, 537 Bloque B Dpto. G, La Paz
Correo electrónico: loretatelleria@yahoo.es
Website: www.observatoriodeseguridad.org.bo

© Woodrow Wilson International Center for Scholars
Website: www.wilsoncenter.org

© Loreta Tellería

© Rut Diamint

Primera edición, La Paz, 2008

Edición: Mónica Navía

Diseño de cubierta: Richard Cornejo

Diseño y diagramación: Dalia Nogales

Producción: Preview gráfica

Teléfono: 248 8413

D.L.

Impreso en Bolivia

Printed in Bolivia

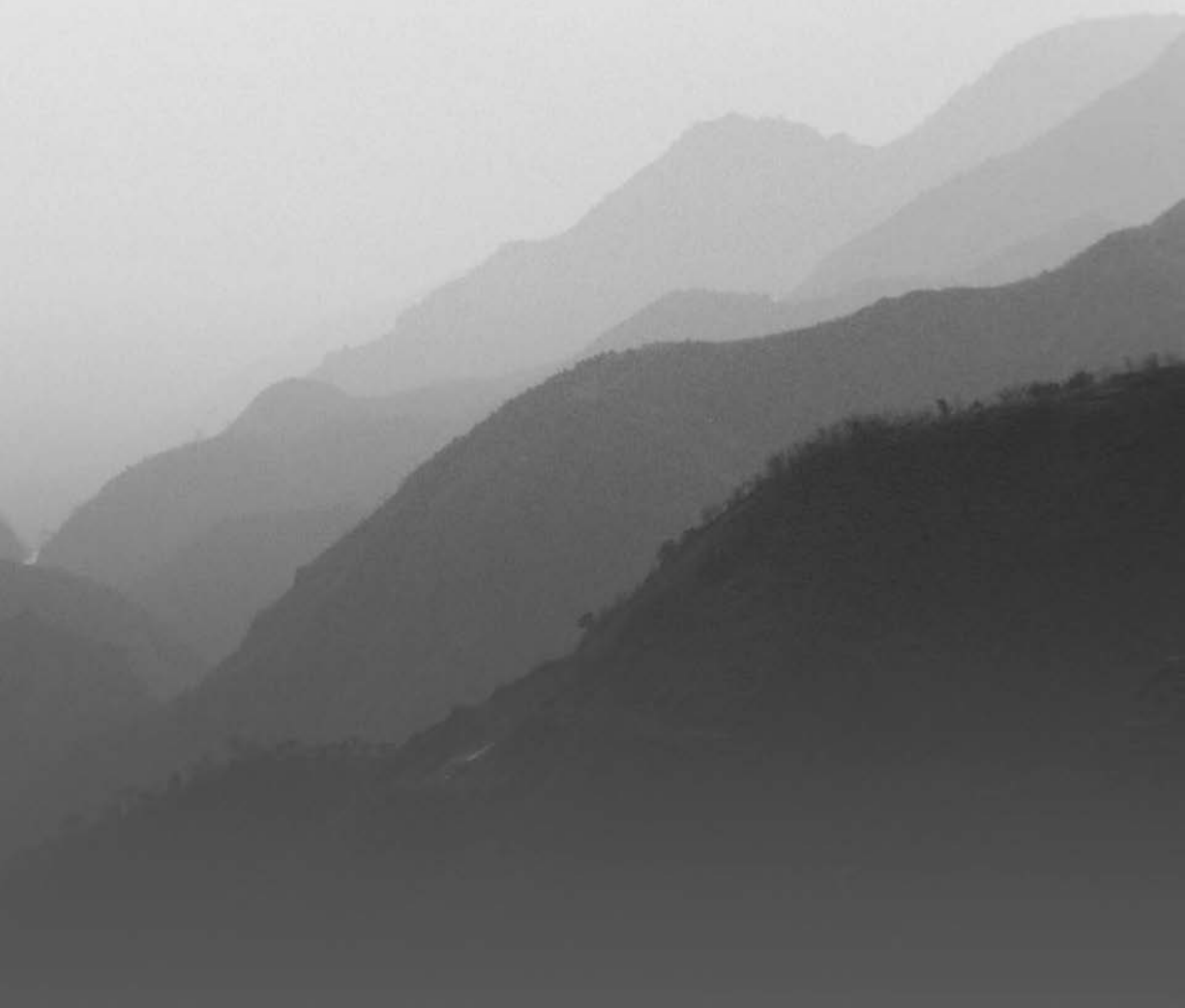
ÍNDICE

Presentación.....	5
1 Seguridad y política exterior en la región andina.....	9
Política de seguridad, gobernabilidad y cooperación en el área andina	11
<i>Pablo Celi</i>	
Tensiones en la región andina.....	22
<i>Arlene Tickner</i>	
Alianzas y fragmentación andina	30
<i>Juan Ramón Quintana</i>	
2 Seguridad y política exterior en las Américas.....	41
América Latina en las Políticas Externas de los EE.UU.....	43
<i>Deborah L. Norden, Ph.D.</i>	
Seguridad y defensa en el Cono Sur: avances y desafíos para la cooperación	54
<i>Carlos Gutiérrez P.</i>	
La geopolítica del hemisferio: desafíos.....	68
<i>Raúl Benítez Manaut</i>	
Brasil: política externa y defensa subregional.....	73
<i>Héctor Luis Saint-Pierre</i>	
3 Avances, retrocesos y desafíos de seguridad.....	83
Cooperación, militarismo y unilateralismo.....	85
<i>Rut Diamint</i>	
Avances, retrocesos y desafíos de seguridad	
El rol de la sociedad civil en cuestiones de seguridad	95
<i>Cristina Eguizábal</i>	
Instituciones y Seguridad Internacional.....	105
<i>Claudio Fuentes</i>	

4	Narcotráfico y seguridad hemisférica	111
	Las frustraciones de la lucha antidrogas	113
	<i>Adam Isacson</i>	
	La Iniciativa Mérida y el combate al crimen organizado en México	123
	<i>Raúl Benítez Manaut</i>	
	Bolivia: Fuerzas Armadas y lucha contra el narcotráfico	133
	<i>Loreta Tellería Escobar</i>	
5	Nuevas perspectivas de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia:	
	¿Política regional o hemisférica?.....	141
	Diagnóstico sobre la coca y el narcotráfico en Bolivia	143
	<i>Ernesto Justiniano</i>	
	Lineamientos de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y	
	Revalorización de la Hoja de Coca en la política boliviana	152
	<i>Jonás Rojas Guzmán</i>	
	Avances y retos que se enfrentan en Bolivia.....	164
	<i>Kathryn Ledebur</i>	
	Clausura	180
	<i>Cynthia Arnson</i>	

4

Narcotráfico y seguridad hemisférica



LAS FRUSTRACIONES DE LA LUCHA ANTIDROGAS

Adam Isacson¹

1. ¿En qué ha consistido la política?

Al contar la historia de la lucha estadounidense contra las drogas, es difícil decidir cuándo iniciar el cuento. Se puede partir de hace cien años, cuando casi todos los narcóticos se declararon ilegales. Se puede tomar otro momento: hace cuarenta años, cuando Richard Nixon fue el primer político de declarar la “guerra contra las drogas,” y en establecer la agencia antidrogas DEA. Un poco más cerca, se puede tomar en cuenta la década de los ochenta, cuando el gobierno de Ronald Reagan inició los primeros programas de erradicación de cultivos ilícitos en la región andina? O hace 20 años, cuando ésta se enfocaba principalmente en los grandes carteles colombianos.

Otro periodo puede ser a principios de los noventa, cuando el nuevo gobierno de Bill Clinton dio fin a la “Iniciativa Andina” de George Bush I, el primer gran programa de ayuda principalmente militar y policial en la región. Tal vez pueda establecer como fecha unos años después, cuando el mismo gobierno de Clinton decidió enfocar sus esfuerzos a la “zona de fuente” de drogas, enfocando sus recursos en la erradicación de cultivos en vez de la interdicción del tránsito o la captura de los capos del narcotráfico. Los finales de los noventa, también fueron años importantes, pues en ese entonces el gobierno de los Estados Unidos se comenzó a preocupar por el poder creciente de los grupos armados, especialmente la guerrilla en Colombia, cuyo poder fue alimentado en mucho por el dinero que ganaban y siguen ganando por el narcotráfico.

En esta exposición, sin embargo, comenzaré con las acciones presentes, con el inicio del Plan Colombia, al que se destinó el año 2000 un paquete de US\$1,3 millo-

1 Centro para las Políticas Internacionales de Washington, Estados Unidos. E-mail: Isacson@ciponline.org.

nes para Colombia y para varios de sus vecinos. Fue en este momento que la lucha antidrogas llegó, en términos financieros y políticos, a ocupar el lugar que antes ocupaba la guerra fría en la visión de seguridad hemisférica que se mantiene en Washington. Fue cuando se comenzó a gastar grandes montos de ayuda militar —y no tanto policiva— para la misión antidrogas en la región, utilizando el pretexto de la seguridad nacional para bajar la prioridad de preocupaciones por el impacto sobre los derechos humanos y las relaciones cívico-militares.

Desde la sanción presidencial del Plan Colombia en julio de 2000, Colombia ha sido el receptor de 70% de toda la ayuda militar y policiva que da Estados Unidos a América Latina —US\$4.8 mil millones—. Esto equivale a 80 por ciento de los US\$6.1 mil millones de ayuda total que se ha dado a Colombia. Eso significa 17 dólares cada segundo desde inicios del 2000 —los otros 20% han tenido que buscar satisfacer una gran variedad de necesidades, desde el desarrollo rural, la reforma judicial hasta la atención a la población desplazada por la violencia—.

En la región ha sido seguido por Perú y Bolivia, con más que US\$500 millones y \$400 millones respectivamente. Gracias a la lucha antidrogas, Colombia ha sido el quinto receptor de ayuda militar y policiva en todo el mundo —el primero fuera del Medio Oriente— mientras Bolivia, Perú, Ecuador y México casi siempre se encuentran entre los principales 15 países receptores.

El Plan Colombia intensificó dramáticamente el empleo de la fumigación aérea de herbicidas como herramienta principal de la erradicación —y, entonces, de la estrategia antidrogas—. La justificación siempre era la eficiencia: dadas las condiciones de seguridad y la total ausencia de presencia estatal en las zonas rurales donde se siembra la coca en Colombia, la fumigación era presentada como la única opción. Desde 2000 hasta mediados de 2008, se han fumigado un poco más de un millón de hectáreas en Colombia: un promedio de 14 hectáreas por hora, cada hora, día y noche.

En Bolivia y Perú la ayuda antidrogas a las fuerzas de seguridad ha sido principalmente policiva, y nunca ha excedido la tercera parte del total del paquete estadounidense. Aunque ha habido más inversión (como proporción) en el desarrollo, el enfoque principal de la ayuda “dura” han sido los programas de erradicación manual. En otros países como Ecuador ha habido programas aún más pequeños, por supuesto que

en Ecuador desde hace diez años ya hubo la Base de Manta, que busca la interdicción en el Pacífico. Este año, mientras el Congreso se aproxima a la aprobación de alguna forma de un paquete de ayuda llamado la “Iniciativa Mérida”, la ayuda a México y algunos países centroamericanos se va a multiplicar. México seguramente subirá al rango número dos entre los receptores de ayuda militar estadounidense en la región.

En Colombia, especialmente desde el inicio de la llamada “lucha mundial contra el terror”, una proporción de la ayuda militar se ha dedicado a esfuerzos más contrainsurgentes que antidrogas, como las ofensivas militares y la protección de infraestructura energética. Pero la vasta mayoría de la ayuda militar viene de cuentas presupuestales establecidas para la lucha antidrogas, y sigue financiando programas como la erradicación (alrededor de la mitad de la ayuda militar); la cuarta parte ha sido destinada a programas de interdicción y la otra cuarta parte a los programas que no tienen tanto que ver con la lucha antidrogas, como programas de desarrollo alternativo, la reforma judicial y la atención a la población devastada en Colombia.

Desde el inicio del Plan Colombia ha habido otras iniciativas militares, muchas de las cuales no han sido antinarcóticos. Hubo decenas de entregas de helicópteros a Colombia, el inicio de muchos programas de interdicción, particularmente aérea y fluvial, y varios programas como la protección de infraestructura energética y el patrocinio de grandes ofensivas militares como el Plan Patriota. A diferencia de Colombia, en los demás países ésta se ha orientado a la ayuda en desarrollo rural.

El modelo que ha seguido Estados Unidos en Colombia está en proceso de aprendizaje y es la manera más optimista de decirlo; ha favorecido grandes proyectos, muchas veces con poca consulta con las poblaciones, en lugar de realmente buscar mejorar la gobernabilidad en estas zonas que realmente tienen vacíos de Estado. En las zonas rurales, la coordinación ha sido malísima. Se han escuchado denuncias sobre programas de desarrollo alternativo que han sido financiados por Estados Unidos y fumigados por la sección antinarcóticos.

2. ¿Cuáles fueron los resultados?

Cuando se inició el Plan Colombia, los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos hicieron declaraciones de política y emitieron documentos de estrategia que

dejaron claro que el objetivo del Plan era reducir dramáticamente la oferta de drogas ilegal proveniente de la región andina. Entre otras metas, se hablaba de una reducción del 50 por ciento de los cultivos de coca dentro de seis años. Pero como casi toda otra estrategia “dura” que se ha ensayado en el marco de la lucha antidrogas, el Plan Colombia ni siquiera se acercó al logro de estos objetivos. De hecho, a mediados de 2007, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que reconocer que detectó más cultivos de coca en Colombia —y la región andina— en 2006 que la que había detectado en 2000. Las Naciones Unidas detectó un gran descenso de cultivos detectados a principios de la década, pero estas reducciones dejaron de registrarse después de 2002, y las cifras preliminares para 2007 indican un crecimiento de 25 por ciento sobre 2006 en Colombia. Las estimaciones de las Naciones Unidas ya indican que se producen casi mil toneladas de cocaína en la región cada año, una cifra nunca antes vista. Así, como estrategia antidrogas, el Plan ha sido un fracaso completo.

En las calles de los Estados Unidos, la cocaína se está vendiendo a precios menores que en 2000, una clara señal de que la oferta está satisfaciendo la demanda mejor que antes del inicio del Plan Colombia. En 2007 se registraron alzas del precio de la cocaína en los Estados Unidos, acercando el precio a los niveles anteriores y llevando al gobierno de Bush a hablar de “escasez”. Pero el mismo Centro Nacional de Inteligencia Antidrogas (NDIC) del Departamento de Justicia estadounidense explica que éste se debía a la guerra contra, y entre, los carteles mexicanos, y que el monto de cocaína detectada saliendo de la región andina es igual que siempre.

Mientras tanto, según las estimaciones del gobierno estadounidense, el tamaño de la población adicta a la cocaína ha seguido igual en el país. Desde principios de los años noventa, alrededor de 2,5 por ciento de los encuestados estadounidenses han respondido que sí utilizaron cocaína al menos una vez en los últimos 12 meses, y 0,5 por ciento utilizaron el “crack”. Ésa es una franja no muy grande de población que tiene adicciones muy fuertes.

En el debate político de Washington, muchos le dan al Plan Colombia el crédito por las recientes mejoras de los indicadores de seguridad en Colombia, como las tasas de homicidio y secuestro, y las posibilidades de viajar en la red vial del país. Pero este análisis es equivocado, porque la vasta mayoría de los aportes estadounidenses ha ido

a la estrategia antidrogas, que no ha rendido resultados. Aunque algunos aspectos de la ayuda sí han contribuido —especialmente los helicópteros (cuando se dejan utilizar para fines no antidrogas), equipos de inteligencia y asesoría a nuevas unidades móviles— éstos representan una pequeña proporción del monto total.

Otro problema es el paramilitarismo que sigue existiendo en Colombia; asimismo, el involucramiento directo del Ejército y las Fuerza Armadas en violaciones a los derechos humanos se ha incrementado. Por ello, si nos preguntamos; ¿es el Plan Colombia el responsable de la mejora de la seguridad en Colombia?, podríamos responder afirmativamente hasta cierta medida; pero cuando se habla de los éxitos de seguridad en Colombia realmente hay que dar el grueso del crédito a los colombianos, por haber gastado más en la protección de sus ciudadanos, porque el grueso del esfuerzo de mejorar la seguridad de los colombianos ha venido de los recursos colombianos.

3. ¿Por qué fracasó?

En Colombia —donde se fumiga— y en Perú y Bolivia —donde la erradicación es manual—, los campesinos cultivadores de coca, en su vasta mayoría, cultivadores pequeños (menos de tres hectáreas) han logrado minimizar y esquivar el impacto de las estrategias punitivas impulsadas a petición de Washington. ¿Qué hacen después de ver sus cultivos erradicados? Algunos se reubican a otra región y siembran de nuevo. Algunos podan las matas fumigadas para que vuelvan a robustecerse en cuestión de meses. Otros siembran en cultivos pequeños, bajo la sombra o entre la maleza, con las plantas más concentradas, evitando así la detección mediante satélite. Otros emplean variedades de coca que rinden más alcaloide de cocaína.

Así, la pobreza y la desigualdad juegan un papel. El hecho de que las tasas de pobreza rural en todos los países de la región exceden el 75% explica eso en gran parte, lo anterior demuestra la debilidad de los Estados más fuertemente en las zonas rurales donde se siembra la coca y donde están más activos en Colombia y hasta cierta medida en Perú los actores armados. Y cuando hablo de la debilidad de los Estados, realmente estoy hablando de la falta de existencia de Estados. También influyen las desigualdades del ingreso, la riqueza y, especialmente en Colombia —donde ni siquiera se ha intentado una verdadera reforma agraria— la tenencia de tierra. Pero

aún más fundamental en la persistencia de los cultivos y el narcotráfico han sido dos factores más: la debilidad estatal y la impunidad.

La debilidad —o mejor dicho, la ausencia— estatal es algo difícil de explicar a audiencias en países desarrollados que están acostumbradas a ver una presencia estatal —Policía, justicia, carreteras, agua potable, salud, educación— hasta en las zonas de menor densidad poblacional. Es difícil explicar cómo se ve un “espacio no gobernado” en un país como Colombia, donde hay 10 mil poblaciones con más de mil habitantes pero sólo tres mil con presencia policiva o militar, y aún menos presencia de instituciones civiles. Entonces no sólo estamos hablando de debilidad del Estado, sino de ausencia total del Estado; estamos hablando de lugares donde no hay carreteras, y cuesta horas transitar cortas distancias; no hay seguridad; no hay protección legal; ni adjudicación de disputas. No hay títulos de tierras, entonces no hay acceso al crédito. El acceso a la educación, la salud y el agua potable es escaso o inexistente. Sin exagerar, se puede decir que la única presencia del Estado que se ve en muchos de esos lugares es la patrulla militar que pasa de vez en cuando o el equipo de erradicación o avioneta de fumigación, que pasa por encima.

Demasiado típico es el ejemplo del caserío de Remolinos del Caguán, Caquetá, que fue visitado por periodistas del periódico colombiano *El Tiempo* en 2004, en medio de una enorme ofensiva militar —la ofensiva Plan Patriota— que estaba pasando por la zona. En Remolinos, ubicado a 225 kilómetros por aire desde Bogotá, los periodistas encontraron una ausencia estatal tan completa que ni siquiera se podía comercializar con pesos colombianos porque ni siquiera había dinero en efectivo, por la escasez de moneda que utilizaban para comprar las cosas. Desde hace unos cinco años no hay inspector en el pueblo y, antes de que llegara la Fuerza Pública al casco urbano, la guerrilla y un comité formado por la Junta de Acción Comunal resolvían los problemas cotidianos de la comunidad. La cultura de la coca se percibe en cada rincón. El dinero escasea y el trueque de pasta de coca por alimentos es común. Una cerveza cuesta un gramo, tres gramos cuestan una libra de carne y cinco se paga por un buen almuerzo. Eso es vivir sin Estado.

En estas zonas de “frontera agrícola” —las selvas y sabanas del sur de Colombia, la Alta Huallaga del Perú, las zonas rojas del Chapare boliviano—, los pobladores

cuentan historias similares de olvido estatal. Son territorios recién colonizados —hace menos de medio siglo— por personas que “tumbaron monte” huyendo de la violencia o buscando un terreno propio. En todos los casos, el Estado no siguió a estos colonizadores a sus nuevos centros poblacionales. Ellos efectivamente dejaron de ser ciudadanos de sus propios países.

Sin servicios básicos del Estado, especialmente sin seguridad, sin justicia y sin una red vial, les resultó muy costoso comercializar cultivos tradicionales. Con la excepción de “bonanzas” periódicas, los cultivadores de yuca, caucho, cacao y otros productos encontraban precios del mercado menores que sus costos de producción. Y cuando grupos armados ilegales llegaban a ocupar el vacío estatal, entre estos costos se incluía los “impuestos” que ellos cobraban. La solución, según lo que se relata, vino con los “narcos”, que les enseñaron a sembrar la marihuana, la coca o la amapola. De repente, habían cultivos fáciles de sembrar y cosechar, fáciles de transportar, aún con ausencia de red vial (el producto de dos hectáreas de hoja de coca se convierte fácilmente en una pasta básica que se puede transportar en una mochila), y fáciles de comercializar a una variedad de compradores ofreciendo y con buenos precios en efectivo (además, ofreciendo crédito para futuras cosechas).

Esto no enriqueció a los cultivadores, que son el eslabón más pobre de toda la cadena de producción de la droga (con la excepción de los trabajadores itinerantes sin tierra, los “raspachines” que cosechan las hojas). Según la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, un campesino con una hectárea de coca goza de una renta mensual de US\$199, aproximadamente dos veces la línea de pobreza, pero no suficiente para vivir la vida de un mafioso poderoso.

En esta narrativa, entonces, ¿qué pasa cuando los erradicadores o fumigadores pasan por la zona y destruyen los cultivos, dejando poco (o no) esfuerzo para establecer una presencia estatal o garantizar la seguridad alimentaria? Como se debe esperar, el campesino —con las mismas malas opciones económicas y en medio de un vacío de autoridad oficial— vuelve a sembrar. Y este resultado tan previsible es lo que ha pasado, ante la frustración eterna de los patrocinadores de la guerra antidrogas.

La presencia del Estado —y el Estado de verdad, no solamente los militares o policías como casi siempre ha sido la costumbre— es el ingrediente clave. Pero hay otra

cara de la moneda de la “presencia estatal”. El mero hecho de incrementar la presencia de representantes gubernamentales puede ser nocivo si estos representantes actúan de manera abusiva, corrupta o predatoria con la población, y sin ser castigados. La historia de la guerra antidrogas está repleta de ejemplos de autoridades a servicio y bajo el pago de las organizaciones criminales o unidades militares apoyadas por Washington involucradas en atrocidades contra poblaciones. Un elemento esencial, entonces, es un sistema de justicia con los recursos y el apoyo político necesario para minimizar la impunidad, garantizando así que la presencia estatal no llegue a ser parte del problema, en vez de la solución.

4. ¿Qué viene ahora?

Un enfoque sobre la debilidad estatal y la impunidad ayuda mucho a entender el fracaso de la lucha antidrogas, antes y especialmente después del Plan Colombia. Pero este enfoque no ha caracterizado, para nada, la política antidrogas de los Estados Unidos en la región. La generosa ayuda de los últimos años ha respondido en gran parte a presiones de la política doméstica, a un ambiente en que candidatos de ambos partidos políticos ganan prometiendo la mano más dura contra el flagelo de las drogas ilegales.

Como resultado, el énfasis de Washington no se ha dado en la “construcción de Estado” (*nation-building*), sino en los esfuerzos que parecían prometer los resultados más rápidos con la menor inversión. El principal de ellos ha sido la erradicación forzosa, que ataca la etapa de la producción de la droga más expuesta y vulnerable: es el momento cuando el producto (los cultivos) está visible, y no escondido en aviones, lanchas rápidas y contenedores. Los programas que sí buscaban mejorar las capacidades de las instituciones civiles de los Estados han recibido una pequeña fracción del monto total, y han sido muy cuestionados por su eficiencia y eficacia.

Mientras tanto, durante los últimos veinte años ha habido un creciente consenso entre los estudios económicos, sociológicos y criminológicos sobre la política que más promete reducir el uso y el impacto de las drogas ilegales. Y no es una política exterior: es la expansión del acceso al tratamiento para la población adicta en el país consumidor.

Uno de los estudios más citados fue ejecutado por la Corporación Rand en 2004, a solicitud del Ejército de los Estados Unidos. Rand fue encargado para modelar la

pregunta “¿Cuánto costaría reducir la oferta de la cocaína por 1 por ciento?” Llegó a la conclusión de que US\$1 gastado en el tratamiento a nivel doméstico fue tan eficaz en lograr este objetivo que US\$7 gastados en policías y prisiones a nivel doméstico, US\$11 gastado en la interdicción en el exterior, y US\$23 gastado en la erradicación de cultivos en el exterior.

Pero gracias a los perversos incentivos de la política doméstica, más el entendimiento de la droga como una “amenaza de seguridad nacional”, el tratamiento de adictos no ha sido una prioridad. El presupuesto nacional de tratamiento a adictos no se ha incrementado desde el primer periodo del gobierno de Bush, y ahora se propone recortarlo —otra víctima de la muy costosa guerra en Irak—.

Ahora, ocho años después del Plan Colombia, hay frustración y cansancio con la guerra antidrogas. Pero en el “*mainstream*” del debate político, no se están proponiendo soluciones basadas en ningún cambio fundamental de sentido. Hay más apoyo para la erradicación manual en vez de fumigaciones, mientras algunos de los más “duros” adelantan la propuesta espantosa de fumigar con algo más fuerte, como bioherbicidas o con “hongos”.

Hay apoyo más generalizado para las políticas de “mano dura” en seguridad del Presidente Álvaro Uribe de Colombia, que sí proponen una mayor presencia militar en “espacios no gobernados” (Remolinos del Caguán ya tiene una guarnición militar). Pero, a pesar de los planes de adoptar un modelo más “integral” y social de sus inversiones, las estrategias del gobierno colombiano siguen con un componente civil muy débil en las llamadas “zonas recuperadas”.

En Colombia se está ensayando con más énfasis la erradicación manual. Como hemos visto, no ha tenido resultados todavía, y el ejemplo de Bolivia bajo el Plan Dignidad nos puede enseñar que la erradicación manual tampoco es la solución. De hecho, sin el Plan Dignidad, Evo Morales el jefe de los cocaleros del Chapare nunca hubiera llegado a ser presidente y se debe su éxito a la erradicación manual. En Colombia están reconociendo cada vez más la necesidad de incorporar a la parte civil del Estado en las zonas donde se siembra la coca. Hay un programa que se llama Centro de Cooperación de Acción Rural (CECAE) que busca incorporar de forma planeada a los demás ministerios del Estado en las zonas no gobernadas. Queda por ver —y

tiene que ser un enfoque de estudio de todos a los que les interesa la gobernabilidad— cómo le irá a ese programa, porque es ambicioso, cuenta con mucho apoyo de Estados Unidos y apenas ha arrancado en casi todas las zonas donde está ensayando.

En 2007, el Congreso estadounidense, con mayoría demócrata por primera vez en catorce años, cambió significativamente la ayuda a Colombia, reduciendo en US\$150 millones (25 por ciento) su componente militar y de fumigaciones, y aumentando en US\$100 millones (70 por ciento) su componente de ayuda a desarrollo alternativo y fortalecimiento de la justicia. Gracias a la frustración con los resultados de la lucha antidrogas, estos cambios se dieron con poca resistencia. Pero es poco probable que haya otro recorte de la misma dimensión este año, mientras los congresistas demócratas esperan ver los resultados de este último cambio.

Por el momento, aunque no se pueden prometer enormes cambios en la composición de la lucha antidrogas, sí se puede esperar cierto incremento en la disponibilidad de experimentar con la política, tanto al nivel doméstico como al nivel exterior. Mientras las experiencias de Irak y Afganistán han reducido la resistencia a la idea de “construcción de Estado”, varios Estados y municipios están buscando adoptar otras soluciones al problema de la droga, desde el tratamiento hasta la descriminalización.

El cambio de la política antidrogas seguirá progresando a velocidad glacial, aunque puede incrementar un poco más si se elige un gobierno demócrata (como es bastante probable) y un Congreso aún más demócrata (como es casi cierto) en noviembre de 2008. De todos modos, llama la atención que la lucha antidrogas es un tema que no ha surgido en ninguna de las decenas de debates que han habido entre los candidatos: el cansancio con la guerra antidrogas es tanto que ni un periodista ni un miembro de la audiencia ha preguntado sobre el tema.

Ésta puede ser una buena noticia. En un ambiente menos apasionado y radicalizado, habría más espacio para la exploración de soluciones alternativas —tanto para localidades como para los gobiernos de la región—. Un nuevo gobierno estadounidense, incluso un gobierno demócrata, probablemente no liderará la búsqueda de una alternativa creativa. La creatividad, en cambio, tendrá que venir de los que tienen que lidiar, día tras día, con la debilidad estatal y la impunidad en sus propias comunidades.